historiareciente

agosto '07 18/25

DESDE HIROSHIMA A LAS TORRES GEMELAS EL PAIS



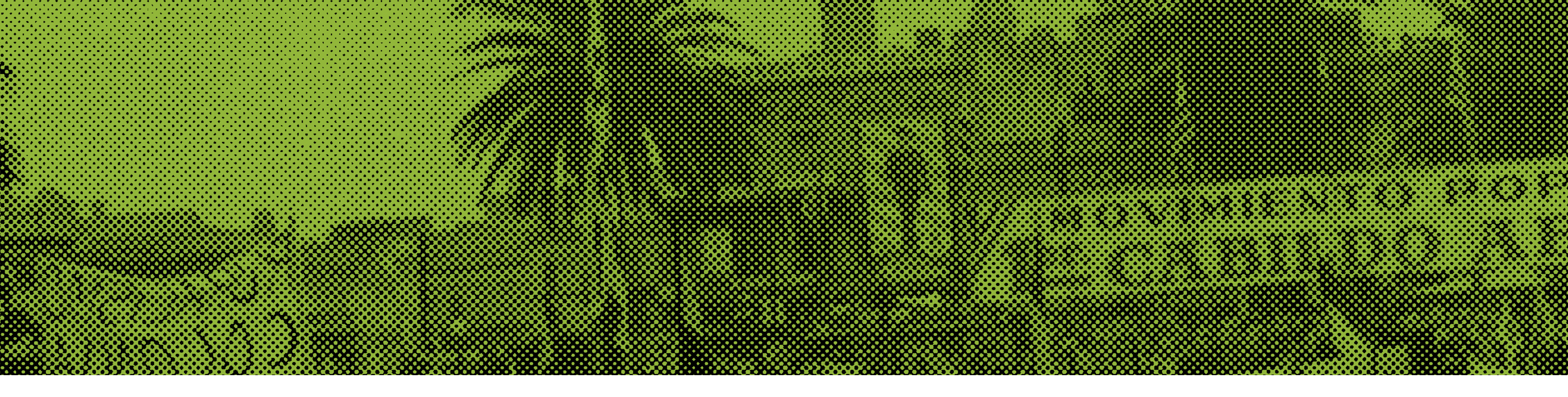
LA ECONOMÍA URUGUAYA DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL



EL COLEGIADO Y LA VICTORIA BLANCA



Uruguay: del fin de la guerra a los gobiernos blancos



18/25



ÍNDICE DEL FASCÍCULO

Uruguay al final de la Segunda Guerra

RECUADROS



△ El **"Che" Guevara** y el caudillo blanco **Eduardo Víctor Haedo** toman mate en Punta del Este (1961). La conversación fue sobre Aparicio Saravia.

INTRODUCCIÓN

El Uruguay de fines de la Segunda Guerra Mundial era un país pacífico y más estable que muchos otros de la región, pero no estaba libre de problemas. Pese a que los años treinta y cuarenta son recordados como una época de oro, ya entonces se insinuaban dificultades que se agravarían con el paso del tiempo.

Políticamente, las guerras civiles habían quedado atrás y las libertades se ejercían de manera más amplia que en otros países latinoamericanos y europeos. Pero también es verdad que hubo dos golpes de estado en menos de una década (1933 y 1942) y que el país aprobó tres constituciones diferentes en 18 años. El orden institucional era permanentemente afectado por los acontecimientos políticos.

En lo económico, el país había optado por un intervencionismo y un dirigismo estatal tan intensos que paralizaban la capacidad productiva y bloqueaban todo proceso de innovación. Sostenido casi exclusivamente por los recursos que generaba el agro, el Uruguay de esa época generó empleo, distribuyó bienestar y construyó una sociedad integrada. Pero los métodos que utilizó para hacerlo (crecimiento acelerado de la administración pública, encierro

lafotodeportada



Cabildo ruralista en la Plaza Independencia: acumulando fuerzas para el triunfo de 1958.

1945.~

[...] Conocer las fragilidades de aquella época es necesario para entender por qué, llegados los años sesenta, ese pacífico Uruguay se hundió en una espiral de inestabilidad y violencia. Y recordar los desaciertos de cada uno de los actores es importante para entender que nuestros males son en buena medida obra nuestra. Buscar culpables fuera de fronteras puede ser sicológicamente confortable, pero no nos ayuda a aprender.

económico, abuso de los monopolios y de los subsidios para sostener una industria incapaz de competir) atentaban desde el principio contra la viabilidad del proyecto.

Lo peor fue que, cuando las señales de alarma empezaron a encenderse, los uruguayos nos resistimos a verlas. En lugar de buscar nuevos caminos de desarrollo, nos aferramos a las conquistas del pasado. Así llegaría un día en el que nos descubriríamos sin conquistas ni desarrollo.

Conocer las fragilidades de aquella época es necesario para entender por qué, llegados los años sesenta, ese pacífico Uruguay se hundió en una espiral de inestabilidad y violencia. Y recordar los desaciertos de cada uno de los actores es importante para entender que nuestros males son en buena medida obra nuestra. Buscar culpables fuera de fronteras puede ser sicológicamente confortable, pero no nos ayuda a aprender. Si no queremos repetir errores, es imprescindible analizar con lucidez y coraje lo que hicimos mal nosotros mismos. ■



Luis Alberto de Herrera

Uruguay al final de la Segunda Guerra

El fin de la Segunda Guerra Mundial encontró a Uruguay en un momento de recuperación democrática y encierro económico. Los años anteriores habían sido difíciles y conflictivos, hasta el punto de conducir a dos golpes de estado en menos de una década. La democracia se había restablecido de manera gradual pero, contra lo que suele creerse, la guerra no había traído mayor alivio a la economía.

Las dificultades habían empezado a principios de los años treinta, cuando el país fue sacudido por la gran crisis del comercio mundial que siguió al derrumbe financiero de 1929. Entre 1930 y 1931, las exportaciones uruguayas cayeron un 30 por ciento. Entre 1931 y 1932 se redujeron un 20 por ciento adicional. La contracción generó una caída de los ingresos públicos y un aumento de la desocupación.

La crisis reforzó los reflejos proteccionistas del país, que ya se caracterizaba por un alto intervencionismo estatal y el férreo control del comercio exterior. En mayo de 1931 se introdujo el contralor del mercado cambiario y de la emisión. El mecanismo otorgaba al Banco República el monopolio de las operaciones de compra y venta de moneda extranjera, lo que le daba un dominio casi total de las importaciones. Antes de esa fecha, un particular podía iniciar un negocio de importación aunque tuviera que pagar enormes impuestos. Pero, desde 1931, el BROU era el único comprador legal de los dólares que obtenían los exportadores y el único vendedor de los que necesitaban los importadores. Si el Banco le negaba a alguien la autorización para importar (y consiguientemente no le vendía los dólares) no había ninguna manera legal de introducir nuevos productos en el país.

La misma mentalidad condujo a otras dos medidas que se tomaron en octubre de ese año: la creación de ANCAP y la monopolización de la telefonía en manos del estado (en las décadas previas, varias compañías privadas brindaban el servicio). En 1932 se agregó el control estatal monopólico del puerto de Montevideo, que es la única de estas medidas que ha sido revertida desde entonces.

Los mayores controles y el aumento del estatismo no permitieron superar la crisis. De hecho, solo contribuyeron a acrecentar el número de empleados públicos (que pasó de 30 mil en 1930 a 52 mil en 1932), a aumentar el gasto del gobierno y a quitarle dinamismo al comercio exterior. Muy pronto estalló el conflicto político. En aquella época regía la Constitución de 1918, que había introducido lo que se llamaba un "Poder Ejecutivo bicéfalo": las tareas ejecutivas se dividían entre el presidente de la República (que básicamente se ocupaba de la seguridad interna y las relaciones exteriores) y un Consejo Nacional de Administración que se encargaba de gestionar la economía.

Gabriel Terra, que había asumido como presidente en marzo de 1931, era un duro crítico de este esquema. Cuando los problemas se agravaron, también lo hicieron sus críticas: "Hay muchos organismos administrando y nadie gobernando el país". Esa actitud lo llevó a tener choques cada vez más frecuentes con el ala batllista de su propio partido (el presidente Terra era colorado), que tradicionalmente había sido favorable al Poder Ejecutivo pluripersonal. El conflicto entre las dos alas del partido de gobierno fue visto como una oportunidad por Luis Alberto de Herrera, el principal caudillo blanco.

Las diferencias institucionales, sumadas a discrepancias en torno al ritmo y a la orientación de las reformas sociales, llevaron a Terra a romper primero con su partido y luego a disolver el Parlamento en marzo de 1933. El golpe condujo al suicidio del ex presidente colorado Baltasar Brum, que se disparó un tiro en la puerta de su casa. El gesto de Brum puso a la opinión pública en contra de un golpe de estado que hasta ese momento había sido incruento. También dañó la imagen de un presidente que, como haría cuarenta años después Juan María Bordaberry, había empezado como gobernante constitucional para convertirse luego en gobernante de facto.

La dictadura de Terra aplicó la censura, encarceló a opositores y envió a dirigentes políticos al exilio. Fue asimismo responsable de otras muertes, como la del dirigente colorado Julio César Grauert (baleado por la policía en octubre de 1933) y las de algunos combatientes de una revolución fallida que estalló en 1935. Pero el grado de represión fue muy inferior al que se conocería en los años setenta, y las características del régimen no se parecieron en nada a las que luego exhibiría la dictadura de Bordaberry.

Terra no se apoyó en los militares, que se mantuvieron ajenos al quiebre institucional, sino en una alianza política integrada por una fracción de su propio partido (el ala "riverista" del Partido Colorado) y por el caudillo blanco Luis Alberto de Herrera. El presidente golpista tampoco se propuso grandes cambios en la orientación general del gobierno. Su principal objetivo era retornar a una Constitución presidencialista, cosa que logró al año siguiente. Luego introdujo algunos cambios en la política económica, principalmente en beneficio del

sector agropecuario. Pero Terra mantuvo en esencia el enfoque estatista y proteccionista de la etapa anterior. En su diagnóstico, los problemas del país se debían al bloqueo político y no a la política económica.

En 1934 Terra consiguió aprobar mediante plebiscito una nueva Constitución. El texto resultaba de un acuerdo con Herrera y no se parecía demasiado a lo que podía esperarse de un presidente golpista. Como resultado de la compleja negociación que lo hizo posible, el nuevo texto dio rango constitucional al derecho de huelga y otros derechos sociales (lo que era una novedad en América Latina) e introdujo la responsabilidad civil del estado, es decir, la obligación estatal de indemnizar a los particulares en el caso de perjudicarlos indebidamente.

Desde el punto de vista de la organización del gobierno, la nueva Constitución trajo tres novedades importantes. En primer lugar, volvía a instalar un Poder Ejecutivo unipersonal con el objetivo de dotarlo de una mayor capacidad de acción. En segundo lugar, y siguiendo una lógica de equilibrios, instalaba varios mecanismos que ponían límites a ese Ejecutivo y lo sometían a control. Parte de esa tarea se ponía en manos de la Corte Electoral (a la que por primera vez se daba rango constitucional), el Tribunal de Cuentas (que fue creado en ese momento) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (cuya creación era ordenada por el nuevo texto constitucional, aunque la puesta en práctica demoró años). Otro conjunto de límites y mecanismos de control se introducían mediante un procedimiento extraño: imponer cuotas políticas en el gabinete de ministros y en la dirección de los entes autónomos, de modo de asegurar la presencia del segundo partido más votado. En particular, el gabinete debía constituirse con seis ministros del partido que ganara las elecciones y tres del segundo. Por último, el nuevo texto eliminaba la representación proporcional en la cámara alta e introducía el "Senado del medio y medio": las 30 bancas del Senado se repartirían en cantidades iguales entre los dos partidos más votados. Era una manera de institucionalizar la coparticipación entre los dos grandes partidos, pero asestaba un duro golpe a las fuerzas políticas minoritarias.

Fruto de un complejo tira y afloje, la Constitución de 1934 combinaba algunos avances institucionales que se incorporaron a la mejor tradición del país con algunas soluciones injustificables. Terra consiguió hacerla aprobar por algo más de la mitad de los votos, pero su política generó profundas divisiones. Los



△ **Alfredo Baldomir**

colorados riveristas lo apoyaban, pero los batllistas se oponían tenazmente. Luis Alberto de Herrera era un aliado, pero el nacionalismo independiente era un enemigo. El quiebre producido en estos años llevaría a introducir la acumulación por lemas partidarios en 1939.

En marzo de 1938 se realizaron elecciones presidenciales por primera vez desde 1930. Fueron los primeros comicios uruguayos en los que pudieron votar las mujeres. El triunfador fue el general y arquitecto Alfredo Baldomir, que había sido jefe de Policía y ministro de Defensa de Terra. A pesar de esos antecedentes, Baldomir prometió un gobierno que devolviera la plena normalidad institucional al país. Lo raro fue que, para hacerlo, decidió dar otro golpe de Estado.

Baldomir consiguió construir una alianza política con el batllismo y el nacionalismo independiente. También el Herrerismo ocupaba tres cargos en el gabinete, pero eso era impuesto por la nueva Constitución. Durante algún tiempo ambas fuerzas coexistieron, pero progresivamente se fue creando un enfrentamiento. Uno de los motivos de fricción eran las turbulencias políticas generadas por la Segunda Guerra Mundial: la mayoría gubernamental favorecía un franco acercamiento con Estados Unidos, mientras Herrera defendía una política de neutralidad. La posibilidad de que se instalaran bases militares estadounidenses en suelo uruguayo generaba una fuerte resistencia en el caudillo blanco, que estaba más preocupado por la influencia norteamericana en América Latina que por la lejana Alemania nazi.

Pero el conflicto político tenía una dimensión más local y trascendente para el país: Baldomir se proponía desmontar el andamiaje institucional construido por Terra (muy especialmente, el "Senado del medio y medio"), en tanto Herrera quería preservarlo. Las razones de Herrera eran claras: en un país donde el Partido Nacional no parecía tener posibilidades de llegar al gobierno, la Constitución de 1934 le daba a los blancos una real capacidad de incidir. Las razones de Baldomir para querer cambiar también eran fuertes: con tres ministros blancos en un gabinete de nueve miembros, y con la mitad de los senadores en manos del Partido Nacional, su gobierno estaba permanentemente enfrentado a desgastantes negociaciones y bloqueos.

A principios de 1941 se consumó la ruptura entre ambos líderes. El detonante ocasional fue la elección de un nuevo presidente para la Cámara de Diputados: los herreristas votaron un candidato distinto del preferido por Baldomir y éste reaccionó expulsando a los tres ministros herreristas del gabinete. A partir de ese momento, el gobierno empezó a funcionar fuera de lo establecido en la Constitución vigente y el Herrerismo empezó a acusarlo de ilegitimidad.

Baldomir se propuso aprobar rápidamente una nueva Constitución y, en octubre de 1941, convocó a una junta consultiva presidida por el Dr. Juan José de Amézaga. La tarea encomendada consistía en elaborar un proyecto sustitutivo del texto de 1934. En los trabajos participaron delegados de todos los partidos, excepto herreristas y comunistas.

Pero, una vez elaborado el texto, había que aprobarlo. Y la Constitución de 1934 establecía tres maneras de iniciar el proceso: la primera requería la firma del 20 por ciento de los inscriptos en el padrón electoral, la segunda requería una mayoría especial en la Asamblea General y la tercera exigía una mayoría también especial en ambas cámaras del Parlamento. Todas ellas exigían como último paso que el nuevo texto fuera objeto de una consulta popular a realizarse conjuntamente con las elecciones nacionales. Los siguientes comicios estaban previstos para marzo de 1942.

El gobierno denunció que las vías previstas en la Constitución bloqueaban toda posibilidad de reforma e intentó flexibilizarlas. Pero la Corte Electoral se opuso a sus planteos. La actitud fue interpretada por Baldomir y sus aliados como una maniobra política, dado que la Corte estaba integrada mayoritariamente por herreristas y seguidores del doctor Eduardo Blanco Acevedo (el principal

rival de Baldomir en la interna colorada). El gobierno propuso entonces incorporar una cláusula especial al proyecto de reforma, que estableciera como único requisito para su aprobación que fuera respaldado por la mayoría de los votantes. Pero Herrera se opuso a esa solución: en el momento de votar una reforma constitucional, lo que está vigente es la Constitución que se pretende cambiar. Los criterios de aprobación deben ser los que esa Constitución establece. Pretender aplicar la nueva cláusula equivalía a dar efecto retroactivo al nuevo texto constitucional, es decir, hacerlo valer desde antes de que fuera aprobado.

Rápidamente los ánimos se caldearon. En un acto realizado en el estadio Centenario, Baldomir advirtió que "si el pueblo dice con cifras que quiere la reforma, la reforma se hará". En respuesta, la bancada herrerista interpeló al ministro del Interior el 20 de febrero de 1942. El debate en el Senado concluyó en las primeras horas del 21 de febrero, con la votación de una moción propuesta por Herrera, Martín Echegoyen y Eduardo Víctor Haedo en la que se manifestaba el repudio "ante tan atentatorias manifestaciones". Ese mismo día, en un país anestesiado por el verano y el carnaval, Baldomir disolvió el Parlamento, destituyó a la Corte Electoral, depuso al vicepresidente César Charlone y nombró un Consejo de Estado consultivo.

El argumento de Baldomir para justificar la ruptura institucional consistía en decir que la Constitución de 1934 no podía ser reformada por canales constitucionales: el amplio peso parlamentario que se había asegurado el Herrerismo le daba poder de veto. El batllismo lo respaldó desde el diario *El Día* diciendo: "no debemos lamentar que una constitución de origen espurio haya sido derribada por la fuerza". Los blancos independientes también le dieron su apoyo, hasta el punto de que su líder, Juan Andrés Ramírez, acuñó la expresión "golpe bueno". También el Partido Comunista lo apoyó. Quienes se habían opuesto al golpe de Terra, respaldaban el nuevo quiebre institucional.

Pero el argumento de Baldomir estaba lejos de ser sólido. Era verdad que dos de los tres procedimientos de reforma previstos en la Constitución de 1934 podían ser bloqueados por la bancada herrerista. Pero el primero, que exigía reunir una cantidad de firmas equivalente al 20 por ciento del electorado, estaba perfectamente al alcance del batllismo. El argumento del bloqueo no justificaba que se diera un golpe de estado un mes antes de las elecciones. Existía un mecanismo constitucional viable, y podía ser aplicado de inmediato.

Por detrás de lo que parecía un debate sobre cuestiones de procedimiento, había en realidad una cruda lucha política entre Herrera, que quería conservar la influencia ganada en las negociaciones con Terra, y otros sectores (especialmente el batllismo) que querían revertirla. También actuaba el impulso a castigar al líder blanco por haber apoyado el golpe de 1933. El orden constitucional fue una víctima de las pasiones desatadas en ese enfrentamiento.

El gran derrotado de la hora fue Herrera. El líder blanco había pagado altos costos políticos por apoyar el golpe de Terra y por haber quedado asociado a una dictadura impopular. Su principal móvil había sido aumentar la influencia política del Partido Nacional. Pero ahora veía desaparecer el orden institucional que había conseguido crear. El momento de debilidad fue aprovechado por sus adversarios, que lo atacaron con dureza. Su defensa de la neutralidad ante el conflicto europeo fue presentada como una posición favorable a la Alemania de Hitler. La consigna "Herrera nazi" empezó a escucharse con frecuencia. Su principal portavoz era un Partido Comunista que, tras el ataque alemán a la Unión Soviética en 1941, había pasado de defender el acuerdo entre Stalin y Hitler a promover "la resistencia al fascismo".

Baldomir gobernó como presidente de facto durante nueve meses, hasta que consiguió aprobar una nueva Constitución el 29 de noviembre de 1942. La reforma tuvo el apoyo del 77 por ciento de los votantes, lo que significó una contundente victoria política.

La nueva Constitución terminaba con el régimen de cuotas establecido ocho años antes. El Senado volvió a integrarse según el principio de representación proporcional y el presidente recuperó la capacidad de elegir libremente a sus ministros. También se terminó con el sistema de cuotas en los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados. Pero muchas modificaciones introducidas en la Constitución de 1934 (como los órganos de contralor) fueron conservadas.

El mismo día que se votó la reforma constitucional se realizaron elecciones para cargos nacionales y departamentales. El Partido Colorado obtuvo una rotunda victoria, con el 57 por ciento de los votos. El Partido Nacional recibió algo menos del 23 por ciento, más otro 12 por ciento del nacionalismo independiente que, debido a su enfrentamiento con Herrera, votaba fuera del lema. La fórmula ganadora llevaba a Juan José de Amézaga como candidato a presidente y a Alberto Guani para la vicepresidencia.

DEMOCRACIA IMPERFECTA, ECONOMÍA AGOBIADA

Los principales episodios de los años treinta y cuarenta arrojan una imagen del Uruguay algo más problemática de lo que suele afirmarse. Percibir este punto es importante para entender la crisis que llegaría después.

El orden institucional era frágil, como lo prueban dos golpes de estado en menos de diez años (1933 y 1942). La Constitución no era tratada como una norma fundamental que fijara las reglas de juego por encima de las circunstancias, sino como un instrumento adaptable a las necesidades políticas del momento. Entre febrero de 1934 y febrero de 1943 el país tuvo tres constituciones. Menos de diez años después (en 1952) el orden institucional volvería a cambiar. La tendencia a reformar con frecuencia la Constitución ha sido un rasgo del sistema político uruguayo (y de casi todos los países latinoamericanos) que no contribuye a robustecer la democracia.

cronología

1930-1934

1930 **30 de julio:** Uruguay campeón del mundo en fútbol.

30 de noviembre: elecciones nacionales.

1931 **1º de marzo:** asume la presidencia Gabriel Terra.

15 de octubre: creación de ANCAP.

1933 **31 de marzo:** golpe de Estado de Gabriel Terra.

25 de junio: elección de la Convención Constituyente.

1934 **19 de abril:** se plebiscita la nueva Constitución y se eligen miembros del Parlamento.

1934-1940

18 de mayo: Gabriel Terra asume la presidencia de la República con el nuevo régimen.

1935 **28 de enero al 4 de febrero:** revolución contra Terra.

1938 **27 de marzo:** Alfredo Baldomir es electo presidente.

19 de junio: Alfredo Baldomir asume como presidente constitucional.

1939 **1º de setiembre:** inicio de la Segunda Guerra Mundial.

13 de diciembre: batalla de Punta del Este. Hundimiento del *Graf Spee*.

1940 **21 de noviembre:** interpelación del senador herrerista

En el Uruguay de los años treinta y cuarenta no había rotación de partidos en el gobierno. La ausencia de este rasgo típico de las democracias maduras era compensada con mecanismos de coparticipación. Esos mecanismos aseguraban la paz civil y evitaban posibles derivas autoritarias, pero generaban costos importantes. Por una parte, los sistemas de distribución de cargos quitaban ejecutividad a los gobiernos e impedían que las mayorías electorales se tradujeran en cambios de orientación significativos. En segundo lugar, los mecanismos de coparticipación daban garantías e influencia a los partidos mayoritarios, pero perjudicaban a los partidos menores. La búsqueda de entendimientos entre las dos grandes colectividades que habían protagonizado las guerras civiles primaba sobre la exigencia de neutralidad del orden institucional. Esta situación puede comprenderse: a principios de los años treinta, la guerra civil de 1904 estaba más cercana en el tiempo de lo que está para nosotros el golpe de estado de 1973. Pero entender las motivaciones de las soluciones adoptadas no impide percibir sus limitaciones.

Sin embargo, los mayores problemas del Uruguay a la salida de la guerra no estaban tanto en el terreno político sino en el económico. Hasta cierto punto ambos planos se influían mutuamente, porque el empleo público era desde hacía décadas uno de los principales instrumentos para construir apoyos políticos. Pero las políticas de la época también se sustentaban en ideas económicas que eran ampliamente aceptadas.

El intervencionismo estatal y el proteccionismo comercial se mantuvieron inmodificados a lo largo de los años. Baldomir se distinguió claramente de Terra en el plano político, pero prolongó sus iniciativas en lo económico. El 9 de enero de 1941 se instaló el Contralor de Exportaciones e Importaciones. Desde ese momento, los montos, las procedencias y los destinos de los productos que se exportaban e importaban quedaron totalmente sometidos a la decisión del gobierno.

La tarea estaba en manos de una comisión honoraria que debía administrar los cupos de importación. El sistema funcionaba del siguiente modo: el Banco República debía realizar cada año una previsión de la disponibilidad de divisas que generarían las exportaciones; la comisión se encargaba de distribuir esas divisas entre los distintos candidatos a importadores. Para tomar sus decisiones, la comisión analizaba los antecedentes de cada empresa: los negocios realizados en el pasado, el número de trabajadores en planilla, los impuestos pagados y otras consideraciones semejantes.

El mecanismo establecía un altísimo costo de entrada para cualquier nuevo actor económico. Una empresa recién formada no tenía casi ninguna posibilidad de poner en marcha nuevos emprendimientos productivos porque no podía acceder a los insumos ni a la tecnología. Ni siquiera era posible acceder a cupos de importación no usados por otros empresarios, porque su venta estaba prohibida. Con el comercio de productos importados ocurría algo semejante. La única forma de entrar en el mercado de importaciones era mediante la compra de una empresa con antecedentes en el ramo.

Estas medidas buscaban equilibrar la balanza comercial y proteger la industria nacional, pero sus efectos fueron muy diferentes. En primer lugar, tuvieron consecuencias nefastas sobre la competitividad de la economía. Las empresas instaladas no se sentían desafiadas por nuevos competidores y sabían que podrían vender todo lo que importaran en un mercado cautivo. En segundo lugar, el sistema generó empresarios que no desarrollaban las habilidades necesarias para competir en mercados libres, sino para obtener el favor del gobierno. Los beneficios económicos no premiaban a los buenos empresarios sino a los buenos *lobbystas*. En tercer lugar, un enorme sistema de distribución de prebendas puesto en manos de una pequeña elite de funcionarios estatales creaba las condiciones ideales para el tráfico de influencias y la corrupción.

¿Cómo se podía reformar la Constitución de 1934?

Artículo 284.– La presente Constitución podrá ser reformada, total o parcialmente, según los siguientes procedimientos:

A. El veinte por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico podrá plantear la reforma en un proyecto articulado que se elevará a la Asamblea General, debiéndose consultar al pueblo en la elección inmediata.
La Asamblea General en reunión de ambas Cámaras, podrá presentar fórmulas sustitutivas, que someterá a decisión plebiscitaria conjuntamente con la iniciativa popular;

B. Todo proyecto de reforma constitucional que reúna dos quintos del total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, será sometido a plebiscito en la primera elección que se realice.
En los casos de los incisos A) y B), para que el plebiscito tenga valor aprobatorio, se requerirá que vote por "sí" la mayoría absoluta de los ciudadanos legalmente hábiles para votar.
Obtenido ese número de sufragios, la reforma se considerará promulgada;

C. La Constitución podrá ser reformada, también, por Leyes Constitucionales que requerirán para su sanción los dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras, dentro de una misma Legislatura.
Las Leyes Constitucionales no necesitarán promulgación del Poder Ejecutivo y entrarán en vigencia inmediatamente después de sancionadas por ambas Cámaras. Sin perjuicio de ello, se someterán a referéndum popular en la primera elección que se realice después de su sanción, estándose a la decisión plebiscitaria, pronunciada por la mayoría de votos emitidos.
Cuando las Leyes Constitucionales se refieran a la elección de cargos de carácter electivo, al ser sometidas a plebiscito –simultáneamente se votará para esos cargos por el sistema propuesto y por el anterior– teniendo al respecto carácter imperativo la decisión plebiscitaria. ■

1940-1942

Eduardo Víctor Haedo al canciller Alberto Guani por el proyecto de instalación de bases estadounidenses en el este del país.

1941 **21 de octubre:** Baldomir convoca a una Junta Consultiva para analizar el proyecto de reforma constitucional. El Herrerismo es excluido.

7 de diciembre: Estados Unidos declara la guerra a Japón y sus aliados.

7 de diciembre: Baldomir organiza un acto público en el Estadio Centenario, y centra su discurso en la necesidad imperiosa de reformar la Constitución.

1942 **15 de enero:** reunión panamericana de cancilleres en Río de Janeiro. La delegación norteamericana

1942

recomienda a las repúblicas del continente la ruptura de relaciones con el Eje.

25 de enero: Uruguay rompe relaciones con el Eje y bloquea los capitales provenientes de los países que lo conforman.

21 de febrero: golpe de Estado de Baldomir.

15 de setiembre: muerte de Gabriel Terra.

29 de noviembre: elecciones generales. Aprobación de la nueva Constitución; Juan José de Amézaga electo presidente.

1943-1950

1943 **1º de marzo:** asume Juan José de Amézaga.

1945 **22 de febrero:** Uruguay declara la guerra a Alemania y a Japón.

1946 **24 de noviembre:** elecciones nacionales generales. Tomás Berreta es electo presidente.

1947 **1º de marzo:** Tomás Berreta asume como presidente constitucional.

2 de agosto: muere Tomás Berreta.

3 de agosto: Luis Batlle asume como presidente constitucional.

1950 **25 de junio:** comienza la Guerra de Corea.



△ **Luis Batlle y Herrera:** las principales figuras de la época.

Obtener cupos de importación pasó a ser una de las principales tareas de los industriales. Los mecanismos de competencia económica fueron sustituidos por una lucha en torno a cuotas de influencia dentro del aparato del estado. Esto explica por qué, contra lo que suele creerse, la economía uruguaya no se benefició con la Segunda Guerra Mundial: el producto bruto tuvo un crecimiento acumulado del 13 por ciento entre 1939 y 1941, pero disminuyó un 7 por ciento entre 1942 y 1943. La caída se debió en parte a una sequía ocurrida en 1942, pero también a otros factores. Por ejemplo, la industria de la construcción no lograba hacerse de las materias primas necesarias para afirmar su crecimiento.

Amézaga, el presidente que sucedió a Baldomir, mantuvo la misma tendencia. Durante su gobierno, el estado se involucró de manera sistemática en la solución y arbitraje de los conflictos económicos y sociales. En noviembre de 1943 se crearon los Consejos de Salarios, donde por primera vez se sentaron patrones, trabajadores y representantes del gobierno. Durante ese período también se extendió el derecho de licencia anual de los trabajadores, se fijaron salarios mínimos en algunas actividades industriales y se estableció la jornada de ocho horas en los comercios. También se extendieron las indemnizaciones por despido y se creó el régimen de asignaciones familiares. En 1946 se aprobó el Estatuto del Trabajador Rural, que fijó el salario mínimo rural.

Las políticas sociales de Amézaga eran generosas, pero traían dificultades serias. En primer lugar, aumentaban la capacidad de los funcionarios del gobierno de afectar la suerte de los actores económicos. En segundo lugar, generaban costos que afectaban la competitividad de las empresas uruguayas. Para compensar este segundo problema, el gobierno impulsó una política proteccionista centrada en la sustitución de importaciones. La idea básica era dificultar el ingreso al país de bienes producidos en el extranjero, para que éstos fueran elaborados por empresas nacionales. En esos años se inició un atraso tecnológico que se acumularía durante décadas.

Las políticas de Amézaga tuvieron éxito en el corto plazo porque se basaron en un esquema sencillo. El agro, beneficiado por los altos precios internacionales, era la principal fuente de ingresos del país. El estado se apropiaba de buena parte de esos recursos para financiar su propia burocracia y subvencionar a la industria protegida. El crecimiento del aparato estatal y de la industria sustitutiva de importaciones aseguraba buenos índices de empleo y sostenía una moderada demanda interna.

Pero el crecimiento de la burocracia estatal hizo más atractivo que nunca el empleo público (en lugar de favorecer un desarrollo genuino) y la participación del estado en prácticamente todos los ámbitos de actividad alentó la corrupción. Amézaga terminó su gobierno acosado por escándalos. Las acusaciones involucraban a altos jerarcas de la administración y al entorno familiar del propio presidente. Su hijo y su yerno estaban entre los denunciados, si bien una comisión parlamentaria no encontró pruebas.

EL GOBIERNO DE LUIS BATLLE

El 24 de noviembre de 1946 se realizaron elecciones en un clima marcado por la euforia: la profundización de la legislación social, el muy buen nivel de vida alcanzado en las zonas urbanas (que en ese entonces tenía pocos equivalentes en el mundo) y el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra, que se había vivido como propio, habían creado una atmósfera de optimismo. Era el Uruguay que se preparaba para festejar el triunfo de Maracaná: satisfecho de sí mismo y desatento a sus fragilidades.

En un contexto tan entusiasta, el partido de gobierno era el gran favorito. Sin embargo, el descrédito en el que había caído la administración de Amézaga le había permitido a Herrera recuperarse de la dura derrota de 1942. El líder blanco había sido el principal crítico del gobierno y ahora tenía una oportunidad de cosechar beneficios.

El batllismo seguía siendo la fuerza dominante en el Partido Colorado, pero estaba dividido en dos corrientes que chocaban con dureza. De hecho, se trataba de un enfrentamiento entre descendientes del propio José Batlle y Ordóñez, que había muerto en 1929. La Lista 14 tenía como dirigentes a sus

1950-1954

16 de julio: Uruguay campeón del mundo en Maracaná.

26 de noviembre: elecciones nacionales. Andrés Martínez Trueba (Lista 15) es electo presidente.

1951 **6 de diciembre:** plebiscito constitucional y reforma de la Constitución. Se introduce el Colegiado.

1952 **1º de marzo:** asume funciones el primer Consejo Nacional de Gobierno.

1953 **27 de julio:** fin de la Guerra de Corea.

1954 **28 de noviembre:** elecciones nacionales. Triunfa el Partido Colorado.

1955-1959

1955 **1º de marzo:** asume funciones el Consejo Nacional de Gobierno, con mayoría de la Lista 15.

1958 **30 de noviembre:** elecciones nacionales. Triunfa el Partido Nacional.

1959 **1º de marzo:** asume el Consejo Nacional de Gobierno, con mayoría herrero-ruralista.

8 de abril: muere Luis Alberto de Herrera.

15 de abril a 23 de junio: las inundaciones obligan a tomar medidas prontas de seguridad.

1959-1964

17 de diciembre: aprobación de la ley de reforma cambiaria y monetaria.

1961 **17 de agosto:** en Punta del Este se reúne el consejo interamericano económico y social que lanza la "Alianza para el Progreso".

1962 **1º de mayo:** primera marcha cañera desde Artigas con la consigna "por la tierra y con Sendic".

25 de noviembre: elecciones nacionales. Triunfa el Partido Nacional.

1963 **1º de marzo:** asume el nuevo Consejo Nacional de Gobierno con mayoría de la "Ubedoxia".

1964 **25 de marzo:** muere Benito Nardone.

tres hijos: César, Lorenzo y Rafael Batlle Pacheco. La Lista 15 estaba orientada por su sobrino, Luis Batlle Berres. Entre los dos grupos había fuertes tensiones. Los hijos de Batlle se sentían depositarios de su legado político pero eran opacados por el carisma y brillantez de su primo. Los "quincistas" recordaban que, en el final de su vida, don José Batlle había mostrado más confianza en las cualidades políticas de su sobrino que en las de sus propios hijos.

Luis Batlle Berres dio una dura lucha para ser candidato a la Intendencia de Montevideo, pero fue bloqueado por sus primos. El cargo era demasiado importante y Luis Batlle lo hubiera convertido en un trampolín para llegar a la presidencia. De modo que el líder de la Lista 15 tuvo que conformarse con un lugar más modesto: ser candidato a la vicepresidencia en la fórmula que encabezaba Tomás Berreta. El puesto de vicepresidente tenía un alto valor honorífico, pero carecía de atractivo para un dirigente en ascenso.

El Partido Colorado triunfó en las elecciones de 1946 con el 46 por ciento de los votos. Dentro del Partido (y en el marco de una acumulación por lemas que permitía presentar varias fórmulas presidenciales en forma simultánea) la dupla Berreta-Batlle fue la mayoritaria. Berreta sería el nuevo presidente y Luis Batlle ejercería la poco ansiada vicepresidencia. También Luis Alberto de Herrera tenía motivos para festejar: el Partido Nacional había tenido un crecimiento importante (había reunido el 31 por ciento de los votos) y Herrera había sido el candidato presidencial individualmente más votado. Era además la primera vez desde marzo de 1931 (es decir, más de quince años atrás) que un gobierno constitucional y surgido de elecciones entregaba el mando a otro gobierno constitucional surgido de las urnas.

Berreta asumió como presidente el 1° de marzo de 1947. Era un hombre prestigioso, de origen modesto y con una gran carrera política a sus espaldas. Pero pocos sabían que estaba enfermo. Berreta murió el 2 de agosto de ese año, apenas cinco meses después de haber asumido. De manera inesperada, el escenario más temido por los hijos de José Batlle y Ordóñez acababa de concretarse: Luis Batlle Berres era el nuevo presidente.

Con la presidencia de Luis Batlle se abre el período llamado "neobatllista" o del "segundo batllismo", que va desde 1947 a 1958. Fue inicialmente un tiempo de abundancia económica, durante el cual el intervencionismo estatal y el proteccionismo comercial llegaron a su paroxismo. Y fue también el período en el que la política fundada en las transferencias desde el agro, la legislación social generosa y el crecimiento de la burocracia llegó a su punto de agotamiento. En el gobierno de Luis Batlle, la concepción de un estado interventor y generoso pero poco preocupado por asegurar las condiciones de un desarrollo sostenible llegó a su máxima expresión y simultáneamente a su límite.

El gobierno de Batlle Berres quiso incidir de manera decisiva en la marcha de la economía: se introdujeron subsidios al consumo, se protegió enérgicamente a la industria y se subsidió a los chacareros mediante la fijación de precios mínimos. Una de las medidas que tendría mayores consecuencias fue la introducción de tipos de cambio múltiples. Según este esquema, el dólar tenía diferentes precios según cuál fuera la actividad de quien comprara o vendiera. Por esta vía se pretendía disciplinar las importaciones, estimular las exportaciones no tradicionales y recortar las ganancias consideradas excesivas. Pero los resultados no fueron los previstos, sino el fortalecimiento de una gran cantidad de grupos de interés que presionaban para obtener ventajas cambiarias (llegó a haber hasta catorce precios diferentes para el dólar en un mismo momento) y el desarrollo de múltiples formas de corrupción generadas por quienes querían comprar dólares baratos y venderlos caros.

Las políticas de Luis Batlle beneficiaron a los empleados públicos, a quienes trabajaban en la industria y el comercio, a los pequeños y medianos comerciantes, a los docentes, los bancarios y los empresarios instalados. En cambio, perjudica-

El atentado del Cine Trocadero

En 1948 Hollywood realizó su primer film importante sobre un tema de la naciente Guerra Fría. Fue "The Iron Curtain" (La cortina de hierro), dirigido por William Wellman, con Dana Andrews y Gene Tierney en los papeles principales. Se dramatizaba allí la historia de Igor Gouzenko, un desertor de los servicios secretos soviéticos cuyas revelaciones permitieron desmantelar la red de espionaje instalada en Canadá.

En todo el mundo los partidos comunistas recibieron la consigna de impedir o perturbar la difusión de la película. Hubo disturbios de variable entidad que comenzaron en varias ciudades de los propios Estados Unidos y prosiguieron en Bruselas, París, Roma, Caracas, Lima y otras capitales del mundo.

El estreno en Montevideo tuvo lugar en el cine Trocadero el miércoles 6 de octubre de 1948. Durante la función nocturna del sábado 9, a las 22:45 en punto, tres personas ubicadas en la cuarta fila se levantaron para retirarse. Eran el ingeniero José Luis Massera, su esposa Carmen Garayalde y una tercera persona. Era la señal; de inmediato algunas decenas de espectadores prorrumpieron en silbidos y patadas en el piso; simultáneamente estallaron bombitas fétidas de ácido sulfhídrico y se estrelló en la pantalla un huevo relleno de alquitrán. Instantes después irrumpían en la sala unas doscientas personas que se habían reunido en las inmediaciones del cine, vociferando: "¡Abajo el imperialismo yanqui!", "¡viva la Unión Soviética!", "¡democracia sí, fascismo no!", mientras destrozaban los vidrios de la entrada, quemaban con ácido los camineros y rompían cantidad de butacas.

Las noticias provenientes del extranjero y las agresivas notas publicadas días antes en el diario *Justicia*, portavoz del PCU, habían alertado a la policía. Numerosos agentes de Investigaciones ocupaban localidades, mientras una guardia reforzada vigilaba el exterior. Así se produjo la detención de unas 30 personas, incluyendo algunas mujeres. De sus declaraciones surgió que la acción había sido decidida en una reunión de autoridades del partido realizada en la noche del jueves 7 y presidida por el diputado Rodney Arismendi, por entonces secretario general del Comité Departamental de Montevideo. La ejecución estuvo a cargo de miembros del "Apparat" partidario que militaban en diversas seccionales y agrupaciones.

A pesar del revuelo que durante varios días ocupó a la opinión pública, el hecho no tuvo consecuencias visibles en el breve plazo. Pero había quedado demostrada la capacidad organizativa y de movilización de un partido que podía en solo 48 horas montar y ejecutar una operación compleja y bien coordinada.

No era la primera asonada que se ejecutó en ese tiempo. En mayo de 1945, durante los festejos populares por la rendición de Alemania, los comunistas apedrearon la fachada de *El Día* por no haber izado la bandera soviética junto a las de los otros países aliados. ■

1964

2 de abril: llega de Bella Unión la segunda marcha de los cañeros.

31 de mayo: muere Javier Barrios Amorín.

15 de julio: muere Luis Batlle Berres.

28 de julio: muere Daniel Fernández Crespo.

8 de setiembre: el Consejo Nacional de Gobierno vota por mayoría de 6 en 9 la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba. La Universidad de la República es ocupada.

8 de octubre: Llega a Uruguay el presidente francés Charles De Gaulle.

1965

1965 **21 de febrero:** se inicia la tercera marcha cañera desde Artigas.

8 de abril: El Consejo Nacional de Gobierno decreta medidas prontas de seguridad. Se reglamenta el derecho de reunión.

20 de abril: intervención del Banco Transatlántico.

21 de abril: se inicia un feriado bancario que durará hasta el 17 de mayo.

1º de junio: se suspenden las importaciones hasta abril de 1966. El dólar llega a 55 pesos (un año antes estaba en 16).

1965-1966

12 de agosto: "Congreso del Pueblo" convocado por la CNT.

16 de setiembre: Dardo Ortiz ministro de Hacienda.

18 de setiembre: devaluación del peso.

7 de octubre: el Consejo Nacional de Gobierno decreta medidas prontas de seguridad.

1966 **5 de junio:** muere César Batlle Pacheco.

27 de noviembre: elecciones nacionales. Triunfa el Partido Colorado. Se aprueba una reforma constitucional que reinstala el Ejecutivo unipersonal. Oscar Gestido es electo presidente.



ron a los propietarios rurales, a muchos inversionistas, al sector financiero y a los agentes económicos no establecidos.

Durante los primeros años, los resultados globales fueron positivos. Entre el inicio de la presidencia de Berreta y el año 1955, la producción agropecuaria creció en el orden del 4 por ciento anual y la industria manufacturera lo hizo en el orden del 8 por ciento. Las exportaciones de lana y productos textiles aumentaron significativamente. También crecieron la producción de electricidad, la refinación de petróleo y el consumo de productos químicos. Todo esto era sostenido por un aumento de la demanda de productos agropecuarios proveniente de Europa Occidental, que se estaba recuperando gracias al Plan Marshall pero todavía no alcanzaba los niveles de producción que lograría más tarde. El fuerte ingreso de recursos generados por el agro, y el aumento del consumo interno provocado por la sustitución de importaciones, sostuvieron a la economía en esos años.

Pero detrás de las buenas noticias había fenómenos preocupantes. El crecimiento de la burocracia estatal estaba alcanzando proporciones desmesuradas: el número de empleados públicos pasó de 57 mil en 1941 a 166 mil en 1955. La productividad de las empresas estatales era cada vez menor. La politización, la burocracia y el atraso tecnológico conspiraban contra la eficiencia. La industria privada aumentaba la cantidad de mano de obra empleada y sus costos de producción, pero no mejoraba su productividad e invertía poco. La escasa o nula competitividad resultante (es decir, la incapacidad de las empresas uruguayas de competir en el exterior) reforzaba la vocación local de los empresarios y aumentaba las presiones en favor de mayores prebendas y protección.

El modelo de desarrollo “hacia adentro” generó cargas terribles para la economía uruguaya, pero no contribuyó a disminuir su dependencia. En primer lugar, la pequeñez del mercado y la falta de inversión hacían que la industria uruguaya fuera totalmente dependiente de los procesos de innovación tecnológica que se producían en el exterior. Los cambios venían de afuera y se incorporaban con lentitud, porque no existían mayores incentivos en un mercado cerrado. En segundo lugar, el país seguía careciendo de materias primas fundamentales (como el petróleo) y no producía los bienes de capital ni los insumos que necesitaba la industria. Todo dependía de que el agro generara las divisas suficientes para comprar maquinaria, bienes semiterminados y materias primas. Pero el agro empezó a estar crecientemente amenazado por las políticas proteccionistas de Europa y Estados Unidos, así como por la competencia de países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. El acceso a los mercados se hizo más difícil y se puso en marcha un proceso de deterioro de los términos de intercambio (es decir, aumentó progresivamente la distancia entre los precios de los productos que el país vendía en el exterior y los precios de los productos que debía comprar).

La economía fue cayendo en un creciente desequilibrio generado por una estructura de precios inestable e impredecible. No era el juego de la oferta y la demanda el que fijaba los precios, sino la capacidad de diferentes actores para torcer el rumbo de la definición cambiaria, aumentar los niveles de protección arancelaria (es decir, los impuestos que se cobran a las importaciones) o lograr subsidios. El juego de los grupos de presión enturbiaba las señales económicas y creaba un clima inapropiado para las inversiones productivas.

Pero, a pesar de su creciente ineficiencia, el sistema tendía a perpetuarse. Los empleados públicos y los chacareros tenían demasiada fuerza electoral como para ignorar sus reclamos. Los empresarios favorecidos por las decisiones del gobierno (por ejemplo, mediante la concesión de cupos de importación) eran los mismos que aceptaban incorporar empleados a pedido de los dirigentes políticos. Los funcionarios que administraban el sistema tenían privilegios que no querían perder. La sociedad pujante de los años veinte, segura de sí misma y proyectada al futuro, fue dando lugar a una sociedad conformada por grupos de interés que se aferraban a sus conquistas e intentaban apropiarse de un crecimiento económico cada día más anémico. Las consecuencias se hicieron inocultables: estancamiento de la producción agraria exportable, actividad industrial agotada por la pequeñez del mercado interno, alta inflación a partir de 1955.

Las responsabilidades que correspondan al gobierno de Luis Batlle Berres en este deterioro económico no deben opacar sus virtudes: fue una época de plena vigencia de las libertades, de cumplimiento cabal de la Constitución y de las leyes, de estricto respeto hacia una oposición que pegaba duro. Esto es especialmente meritorio si se tiene en cuenta que, en el mismo momento, Perón gobernaba la Argentina con creciente autoritarismo y Brasil estaba sacudido por un encadenamiento de conflictos que culminaron en el levantamiento militar contra Vargas y el consiguiente suicidio del presidente.

LA INSTALACIÓN DEL COLEGIADO

Los éxitos obtenidos por Luis Batlle en los primeros años de su gobierno aseguraron la victoria del Partido Colorado en las elecciones de noviembre de 1950. Como la reelección consecutiva no era posible, el candidato fue Andrés Martínez Trueba, un dirigente apadrinado por el propio Batlle Berres. La idea de Batlle era que Martínez Trueba gobernara durante los siguientes cuatro años y que él fuera reelecto en 1954. De algún modo



le asignaba a Martínez Trueba el papel que había desempeñado Claudio Williman entre 1907 y 1911, cuando ejerció la presidencia entre el primer y el segundo período de José Batlle y Ordóñez.

Pero las cosas no salieron como Luis Batlle las había planeado. En lugar de ser un nuevo Williman, Martínez Trueba se alió con la Lista 14 y con Luis Alberto de Herrera para impulsar una reforma constitucional que introdujera el Poder Ejecutivo colegiado. Si la reforma se aprobaba, el país pasaría a ser gobernado por un Consejo Nacional de Gobierno integrado por nueve miembros: seis del sector mayoritario del partido más votado y tres del que entrara segundo en las elecciones.

La reforma se presentaba como un retorno a las ideas de José Batlle y Ordóñez, pero había una clara voluntad política de cerrarle el paso a Luis Batlle. Su personalidad carismática y el amplio apoyo popular que recibía inquietaba tanto a la oposición herrerista como a sus correligionarios. El clima del momento queda reflejado en un informe enviado por el embajador francés Albert Ledoux a su ministro de Asuntos Exteriores: "El señor Batlle Berres guarda rencor al señor Martínez Trueba por haber decepcionado sus esperanzas. Había, en efecto, promovido y apoyado la candidatura de su sucesor con la esperanza de asegurar su propia reelección en 1954. El Sr. Martínez Trueba no tuvo nada más urgente que hacer que aprobar una reforma que suprimiera esa posibilidad".

La reforma fue aprobada por escaso margen en un plebiscito realizado el 16 de diciembre de 1951, y entró en vigencia el 25 de enero del año siguiente. El texto preveía que los miembros del Consejo Nacional de Gobierno se eligieran por voto popular cada cuatro años, pero una cláusula transitoria establecía que la Asamblea General designara a los primeros integrantes. La elección se hizo el 1º de marzo de 1952. Por el Partido Colorado fueron electos Andrés Martínez Trueba (que presidiría el Consejo), Francisco Forteza, Antonio Rubio, Héctor Álvarez Cina, Luis Alberto Brause y Eduardo Blanco Acevedo. Los tres primeros representaban a la Lista 15, Álvarez y Brause a la Lista 14 y Blanco Acevedo al sector no batllista del Partido Colorado. Los consejeros nacionalistas fueron Álvaro Vargas Guillemette, Martín Echegoyen y Roberto Berro.

El año 1952 estuvo cargado de conflictos. Hubo paros en la banca, en el transporte, en la UTE y en las emisoras de radio. Varias fábricas fueron ocupadas por sus trabajadores. Una huelga de funcionarios de la salud llevó a que el gobierno decretara medidas prontas de seguridad en marzo. En setiembre volvió a hacerlo como respuesta a los paros en el transporte, ANCAP y las plantas textiles.

La trabajosa búsqueda de equilibrios intra e interpartidarios dentro del colegiado y la burocratización de la administración pública trabaron la capacidad de acción del gobierno. Las denuncias de corrupción se multiplicaron. El 11 de enero de 1955, durante el receso parlamentario, se votó una ley que permitía a los legisladores importar dos autos cero kilómetro libres de impuestos por legislatura, lo que aumentó el desprestigio del sistema político.

En ese contexto empezó a emerger un dirigente de la Liga Federal de Acción Ruralista llamado Benito Nardone, pero más conocido por su apodo: "Chico Tazo". Nardone criticaba las políticas del gobierno y responsabilizaba al modelo neobatllista de las dificultades que

Argentina y Uruguay: un siglo de tensiones y reencuentros

Las relaciones entre Uruguay y Argentina tuvieron altibajos a lo largo del siglo XX. La revolución blanca de 1904 generó las primeras tensiones de la centuria: el presidente argentino Julio A. Roca permitió que la Junta de Guerra del Partido Nacional se moviera con libertad en su territorio, lo que generó la reacción del presidente José Batlle y Ordóñez, que procuró y obtuvo el apoyo de Estados Unidos. En 1932, el presidente Terra rompió relaciones diplomáticas (que se restablecieron pocos meses más tarde) por un incidente que involucró a un barco de bandera uruguaya en el puerto de Buenos Aires. La Segunda Guerra Mundial trajo nuevos roces: el gobierno uruguayo tuvo una política exterior favorable a los aliados, en tanto Argentina mantuvo una neutralidad que apenas escondía una cuota de simpatía hacia Alemania.

Cuando se analizan las relaciones entre los dos países, el telón de fondo está dado por las pretensiones argentinas de hegemonía regional y por su histórico enfrentamiento con Estados Unidos. Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el gobierno de Alfredo Baldomir decidió aceptar la instalación de bases militares estadounidenses en la costa atlántica uruguaya. El *New York Times* publicó la noticia en noviembre de 1940 y generó la inmediata respuesta de Julio Roca, ministro de Relaciones Exteriores argentino. Roca (un hijo del ex presidente) advirtió al canciller Alberto Guani que Argentina no estaba dispuesta a aceptar sin consulta previa ningún acuerdo entre el gobierno uruguayo y una potencia extranjera que afectase la situación del Plata. El diferendo no pasó a mayores por una razón interna: una interpelación del senador Eduardo Víctor Haedo al canciller Guani terminó con la posibilidad de instalar las bases. Pero el 14 de diciembre de ese año, los cancilleres de ambos países firmaron el llamado "pacto de Anchorena", que estableció el compromiso de no firmar ningún tratado que involucre a la cuenca del Plata sin un acuerdo previo entre los gobiernos.

El conflicto recrudeció en 1943, cuando el gobierno de Amézaga negoció la creación de una base militar estadounidense en Laguna del Sauce. Pero el proyecto fue nuevamente frustrado por la oposición herrerista. Al año siguiente, Uruguay integró el grupo de países que, a iniciativa del Departamento de Estado nortemearicano, decidieron no reconocer al gobierno militar de Edelmiro Farell (el predecesor de Perón). Argentina reaccionó con sanciones económicas y presiones que buscaban silenciar la propaganda radial de los exiliados argentinos en Montevideo. En 1945 hubo otro pico de tensión, cuando el canciller uruguayo Eduardo Rodríguez Larreta promovió la creación de un mecanismo de intervención colectiva para el caso de que el régimen democrático fuera amenazado en cualquier país del continente.

Pero el peor momento llegó a fines de la década, cuando Perón gobernaba en Argentina y Luis Batlle lo hacía en Uruguay. El Partido Colorado se había manifestado claramente como antiperonista, antifascista y antimilitarista. Batlle estaba convencido de que Perón era fascista y le tenía antipatía personal. Perón, por su parte, no toleraba que Uruguay recibiera a los exiliados argentinos, ni que las radios uruguayas fueran los principales medios opositores en Argentina. Por eso intentó perjudicar los intereses comerciales y turísticos uruguayos.

En 1952 y 1953, la intensificación de las acciones de los exiliados argentinos llevó a Perón a amenazar con cortar relaciones si el gobierno uruguayo no los silenciaba. Pero desde Montevideo se respondió que, a diferencia de Argentina, en Uruguay no se practicaba la censura. La rebelión militar que terminó con el gobierno de Perón en 1955 fue bien recibida por el batllismo. ■

enfrentaba el país. Sus métodos incluían un uso intensivo de la radio (la emisora desde la que hablaba, Radio Rural, llegaba a casi todo el país) y la organización de "cabildos abiertos".

Pese a las críticas y al agravamiento de la situación, el Partido Colorado volvió a ganar las elecciones de noviembre de 1954. Los resultados rompieron el equilibrio entre las listas 15 y 14: la lista de Luis Batlle obtuvo unos 255 mil votos, contra 180 mil del sector liderado por sus primos. En el Partido Nacional, el Herrerismo alcanzó 160 mil sufragios, seguido del ascendente liderazgo de Daniel Fernández Crespo con 112 mil votos. Los unionistas (ex blancos independientes) Eduardo Rodríguez Larreta y Washington Beltrán reunieron 37 mil voluntades. El grupo liderado por Juan Andrés Ramírez (llamados ahora "blancos intransigentes") recibió 32 mil votos en un lema diferente. Todos los partidos de izquierda alcanzaron en conjunto el 5 por ciento de los sufragios.

Luis Batlle había vuelto a triunfar, pero ahora debía actuar como presidente de un Consejo Nacional de Gobierno que también integraban los colorados Alberto Zubiría, Arturo Lezama, Carlos Fischer, Justino Zavala Muniz y Zoilo Chelle, así como los blancos Luis Alberto de Herrera, Ramón Viña y Daniel Fernández Crespo. La reforma colegialista había permitido a Herrera ingresar al Consejo como minoría gobernante. Una vez más, la fórmula consistente en introducir cuotas en el Ejecutivo le había dado resultado.

El segundo período de gobierno de Luis Batlle fue mucho más difícil que el primero. La situación económica y social se deterioraba, y el colegiado lo obligaba a pelear simultáneamente en dos frentes: debía enfrentar la creciente oposición dentro de su propio partido (fruto del agotamiento de las políticas que se venían aplicando) y resistir el operativo de desgaste al que diariamente lo sometía Luis Alberto de Herrera.

Batlle debió buscar un acuerdo para lograr la mayoría parlamentaria, como resultado del cual la Lista 14 obtuvo cinco ministerios. La enorme concesión demostraba la fragilidad política del líder quincista. Esa fragilidad se hizo definitiva cuando, el 9 de mayo de 1956, los catorcistas abandonaron el gabinete.

La administración de la crisis no estaba dando resultados convincentes. El gobierno insistió en las fórmulas conocidas, como la multiplicación de los empleos públicos, pero con eso solo alentó la burocratización y la ineficiencia. El número de empleados públicos pasó de 166 mil en 1955 a casi 194 mil en 1959. Las cajas Civil y de Industria y Comercio vieron aumentar el número de jubilados de 53 mil a 141 mil en cuatro años. Pero el recurso a los empleos públicos y a las jubilaciones para dar respuesta a las demandas no hacía más que agravar los problemas. Las denuncias sobre fraude se multiplicaban. Diversos jerarcas del Estado fueron acusados de estar en connivencia con los exportadores de carne y lana para inflar costos y obtener subsidios mediante declaraciones falsas. Más allá de lo bien o mal fundado de las acusaciones, su existencia reflejaba un clima de creciente crispación.

La economía uruguaya enfrentaba crecientes problemas de inserción internacional, y Luis Batlle intentó enfrentarlos personalmente. En 1955 viajó a Estados Unidos con el propósito de aumentar las colocaciones de *tops* de lana. Pero volvió sin grandes resultados. Se intentaba resolver con gestiones políticas lo que en realidad requería una nueva dinámica económica.

A partir de 1957, los síntomas de la crisis se agravaron. Las exportaciones disminuyeron, la ganadería siguió estancada y la inflación se disparó: pasó del 10,3 por ciento en 1955, al 18,3 por ciento en 1957, a cerca del 49 por ciento en 1959. Como el modelo dirigista se mantenía, el Banco República se vio obligado a establecer rígidas limitaciones a las importaciones para equilibrar la balanza comercial. El sector agropecuario, castigado por un gobierno cada vez más necesitado de recursos, llegó a retener la producción lanera como medida de protesta. La insatisfacción del sector generó falta de carne para el abasto montevideano, porque muchos productores preferían recurrir al contrabando de ganado en pie hacia Brasil, antes que colocar su producción en el mercado nacional.

La oposición blanca sintió que tenía una oportunidad real de llegar al gobierno. La condición para lograrlo era concluir el proceso de reunificación que se había iniciado en las elecciones anteriores. El voto dividido de los blancos (consecuencia de los conflictos entre Herrera y el nacionalismo independiente) no había sido demasiado grave mientras el Partido Nacional no era opción de gobierno, pero ahora era diferente.

El 15 de agosto de 1956, el Partido Nacional Independiente, la agrupación Reconstrucción Blanca y el Movimiento Popular Nacionalista de Daniel Fernández Crespo formaron una coalición

Luis Alberto de Herrera

Nació en 1873, en el seno de una familia patricia. A principios del siglo XX actuó como diplomático en Estados Unidos. Esa estadía le permitió conocer el formidable desarrollo de aquel país y atrajo su atención sobre el peso de su diplomacia en el continente. Desde Estados Unidos envió columnas de opinión que eran publicadas en el diario *El Día*, de José Batlle y Ordóñez.

Sirvió en las guerras civiles de 1897 y 1904. Luego lideró a la joven generación blanca que se enfrentó a José Batlle y Ordóñez desde el Parlamento. Participó de las reformas liberales de su tiempo: votó el divorcio por sola voluntad de la mujer y la separación de la Iglesia y el Estado. Redactó proyectos de ley que intentaban humanizar el mundo del trabajo.

Bajo su liderazgo, el Partido Nacional dejó definitivamente el camino de las armas. Conjugó la doble dimensión de caudillo y de doctor. Propició un revisionismo histórico que, desde varias obras, procuró arrojar luz sobre el proceso de construcción nacional. Gustaba definirse como un "liberal tranquilo", a la vez que defendía con vigor la identidad nacional, entendida como voluntad colectiva y permanente de destino común. Desde el diario *El Debate* atacó al Partido Colorado. Criticaba sus prácticas políticas, su visión del país y su concepción de la economía. Fue un duro rival de las políticas que, durante la Segunda Guerra, promovieron un alineamiento con Estados Unidos.

Carlos Real de Azúa, en la semblanza que le dedicó, escribe que "durante un período que cubre cuarenta años y la vigencia de cuatro constituciones –las de 1917, 1934, 1942 y 1951–, la vida política y partidaria se polarizó en torno a la adhesión (llevada en algunos hasta el fanatismo) o al rechazo (llevado en algunos hasta la abominación) de la personalidad de Luis Alberto de Herrera".

Tras numerosos fracasos electorales, logró llevar al Partido Nacional al gobierno en 1958. Era el objetivo que se había fijado cuando, en los años veinte, había convencido a los blancos de abandonar la lucha armada. Pero antes de asumir el nuevo gobierno quedó marginado de las decisiones. Murió el 8 de abril de 1959. ■

denominada Unión Blanca Democrática (UBD). En el extenso documento que dieron a conocer ese día, los dirigentes "ubedistas", como pronto se les llamó, hicieron un inventario de los principales males que afectaban al país: corrupción administrativa, favoritismo político, inflación presupuestal y burocrática, declinación de los valores morales. Las políticas de Luis Batlle eran identificadas como la causa inmediata de estos problemas. Este énfasis en la responsabilidad del "quincismo" era un punto de convergencia con Herrera, que en ese entonces conducía una dura ofensiva contra el gobierno.

También el Herrerismo intentaba ampliar sus bases. Llegado el año electoral, Herrera buscó un entendimiento con el movimiento ruralista de Benito Nardone, sobre la base de una propuesta de reforma constitucional. El 16 de agosto de 1958 se realizó el congreso extraordinario de delegados de la Liga Federal, en el que se decidió aceptar el ofrecimiento. Herrerismo y ruralismo resolvieron que, si la Constitución se modificaba y se volvía al Ejecutivo unipersonal, Herrera sería el candidato a la presidencia y Nardone el candidato a vice. Para el caso de que el colegiado siguiera vigente, se confeccionó una lista que alternaba a herreristas y ruralistas. Al igual que la UBD, el Herrerismo se había embarcado en una dinámica de acumulación política.

Luis Batlle era un político experimentado y enseguida supo que las siguientes elecciones serían complicadas. Para fortalecer su posición, impulsó una serie de leyes sociales que fueron aprobadas durante la segunda mitad del año electoral: seguro de paro, salario por maternidad, asignación familiar para desocupados, seguro de enfermedad para obreros de la construcción, modificación de las leyes de despidos y de vacaciones anuales. Las medidas generaron un gran número de beneficiados, pero también agudizaron los ataques de Herrera, que acusaba al gobierno de demagogia y trataba a la Lista 15 de "garrapata prendida al pecho de la Nación".

Pero lo peor para el partido de gobierno era la división dentro del batllismo. Luis Batlle actuaba con energía e intentaba acelerar las reformas sociales, pero la Lista 14 era crecientemente crítica y convocaba a la formación de un frente antiquincista. Las desavenencias eran en parte políticas y en parte doctrinales. Se discutía sobre la mejor forma de conducir al Partido Colorado, sobre el papel del estado, sobre la importancia del equilibrio fiscal y el alcance de los subsidios. Pero, por encima de todo, había un conflicto cargado de afectividad acerca de cuál de las dos corrientes era la auténtica heredera de José Batlle y Ordóñez. Los "catorcistas" eran especialmente duros en este punto: acusaban a Luis Batlle de populista y afirmaban que su administración hipertrofiada y cargada de irregularidades no tenía ningún vínculo con el batllismo original. Luis Batlle sufría profundamente esos ataques de sus primos hermanos, a los que responsabilizaría más tarde de la derrota.

Cuando la campaña electoral llegaba a su fin, el triunfo del Partido Nacional estaba en el aire. La "caravana de la victoria" organizada por Herrera recorrió con entusiasmo cada rincón del país. Era la última gira electoral del viejo caudillo, que tenía ya 85 años.

EL PRIMER GOBIERNO BLANCO

Los comicios del 30 noviembre de 1958 llevaron a los blancos al gobierno por primera vez en 94 años. La amplia diferencia de votos (unos 120 mil) hizo saber muy pronto que el nuevo gobierno sería del Partido Nacional. Tradicionales

Funcionarios públicos en Uruguay (1900-1969)

AÑO	Nº FUNCIONARIOS	% SOBRE LA POBLACIÓN
1900	14.500	1,8
1930	30.000	1,7
1932	52.000	2,9
1941	57.200	2,9
1955	166.000	6,9
1969	230.000	8,2

Luis Batlle

Nació en Montevideo el 26 de noviembre de 1897, hijo de Luis Batlle y Ordóñez (el único hermano de don José Batlle) y de Petrona Berres Mac Entyre. Su madre murió cuando él tenía 3 años y su padre cuando tenía 11. Desde entonces se integró al hogar de su tío paterno. Allí convivió con sus primos y conoció de cerca el ejercicio de la actividad política. Estudió secundaria en el Liceo Elbio Fernández y, tras un breve pasaje por la Facultad de Medicina, estudió Derecho. Pero nunca terminó la carrera, porque se dedicó tempranamente al periodismo en el diario *El Día*.

Fue electo diputado en 1923 y conservó su banca hasta el golpe de estado de marzo de 1933. Opositor al presidente Terra, fue expulsado del país en agosto de ese año. Vivió exiliado en Argentina y Brasil, y participó en la preparación de la fallida "revolución de enero" de 1935. Retornó al país en 1936 y compró Radio Ariel. Había percibido la importancia de ese medio de comunicación en la formación de la opinión ciudadana, y haría de él un uso muy intenso y efectivo. En 1942 fue electo nuevamente diputado. En 1943 fue presidente de la Cámara.

En las elecciones de 1946 pudo haber sido candidato a intendente de Montevideo, pero las pugnas internas del batllismo lo llevaron a acompañar la fórmula presidencial de Tomás Berreta. Pocos meses después, el fallecimiento de Berreta lo llevaría a la presidencia de la República. Su vigor político y su gran carisma personal lo convirtieron en el líder indiscutido de un batllismo de corte popular.

En 1948 decidió fundar su propio periódico, *Acción*, que tendría una enorme relevancia en la vida del país. En 1950 y en 1954, la Lista 15 que él dirigía ganó las elecciones. Las perdió en 1958 y 1962. Fue un exitoso formador de dirigentes políticos. Manuel Flores Mora, Zelmar Michelini, su hijo Jorge, Eduardo Paz Aguirre, Luis Hierro Gambardella y Julio María Sanguinetti fueron miembros de una generación llamada "los jóvenes turcos", que se formó bajo su influencia. Murió el 15 de julio de 1964. Amado y resistido, fue una de las figuras más intensas que tuvo la política uruguaya. ■

baluartes colorados como Montevideo, Canelones y Maldonado habían caído en manos nacionalistas. Ni la Lista 15 ni la Lista 14 se habían beneficiado del enfrentamiento interno: ambas habían perdido votos en relación a las elecciones anteriores.

Pero si pronto estuvo claro que el Partido Nacional había ganado, hubo sorpresas de último momento respecto de quién tendría la mayoría partidaria. Durante buena parte del conteo se creyó que la UBD sería la fracción mayoritaria: al finalizar el escrutinio primario en Montevideo, su ventaja era de 30 mil votos. Pero la llegada más lenta de los votos del interior (y en especial de los circuitos rurales) terminó dando el triunfo al Herrerismo por escaso margen.

El cambio de gobierno fue un momento delicado en la vida del país. La última vez que los blancos habían gobernado había sido durante la presidencia de Bernardo Prudencio Berro, entre 1860 y 1864. Y si bien Berro había conseguido concluir su mandato, desde 1863 había debido enfrentar el levantamiento armado del general Venancio Flores. Desde entonces (y con la excepción del breve interinato de Atanasio Aguirre que siguió a la entrega del mando por parte de Berro) siempre habían gobernado los colorados.

El traspaso se produjo en un clima cargado de tensión. Algunos militares de origen nacionalista sospechaban que a último momento los colorados se negarían a entregar el gobierno, y algunos militares colorados sospechaban que esa duda ocultaba un intento desestabilizador. Parte de las tropas que desfilaron ese día llevaban las armas cargadas con munición de guerra. Pero finalmente todo ocurrió con normalidad.

El país estaba viviendo por primera vez en casi un siglo una de las experiencias características de toda democracia madura: la rotación de partidos en el ejercicio del gobierno. La mayoría del Consejo Nacional de Gobierno quedó integrada por seis representantes del acuerdo herrero-ruralista: Martín R. Echegoyen, Benito Nardone, Eduardo V. Haedo, Faustino Harrison, Justo M. Alonso y Pedro Zabalza. La minoría quedó constituida por dos integrantes de la Lista 15 (Juan Manuel Rodríguez Correa y Ledo Arroyo Torres) y por César Batlle Pacheco en representación de la Lista 14.

El nuevo gobierno tenía objetivos ambiciosos que se resumían en la idea de desarticular el esquema intervencionista y dirigista del segundo batllismo. Pero desde el primer momento se enfrentó a una serie de situaciones de emergencia: en marzo de 1959 no había fondos para pagar los salarios públicos correspondientes a febrero; la UTE no podía afrontar sus compromisos internacionales y la firma Siemens anunciaba la detención de las obras en la represa de Baygorria, lo que implicaba licenciar a unos mil obreros; el Ministerio de Obras Públicas había suspendido las obras por falta de materiales; el Banco Hipotecario había comprometido hipotecas por el doble de sus posibilidades; había cuatro mil expedientes por jubilaciones y pensiones sin informar, y la Contaduría General de la Nación tenía atrasos de hasta catorce años.

A estos problemas heredados se sumaron los conflictos dentro del propio gobierno. La alianza entre herreristas y ruralistas se reveló extremadamente frágil. Ya en las primeras semanas, el diario herrerista *El Debate* lanzó una dura campaña contra el ruralismo. La muerte de Herrera, el 8 de abril de 1959, dejó huérfano al principal sector del Partido Nacional y puso la responsabilidad de la conducción del país en manos de los integrantes del Consejo de Gobierno.

La administración blanca consiguió afirmarse y empezó a mostrar buenas capacidades de gestión. Una prueba de fuego llegó con las graves inundaciones de 1959, que obligaron a aplicar medidas prontas de seguridad entre el 15 de abril y el 23 de junio. Para salvar la represa de Rincón del Bonete fue necesario abrir las compuertas y permitir la inundación de Paso de los Toros. Las pérdidas materiales fueron millonarias. Más de 40 mil personas debieron abandonar sus hogares en todo el país. Se racionó la energía, se modificaron los horarios laborales y se organizó un comité de ayuda a los damnificados. La emergencia obligó al gobierno a disciplinarse y mostró una buena coordinación entre las nuevas autoridades y las jerarquías militares.

Una vez superado el episodio, el gobierno empezó a cumplir su mayor promesa electoral: desmontar el modelo neobatllista. El principal instrumento de ese cambio fue la aprobación, el 17 de diciembre de 1959, de una ley de reforma cambiaria y monetaria que había sido diseñada por un joven ministro de Hacienda: Juan Eduardo Azzini.

La ley derogaba las disposiciones que daban al estado la facultad de fijar los tipos de cambio. En lo sucesivo, el valor de las diferentes monedas se fijaría por la oferta y la demanda. En sustitución de los tipos de cambio múltiples, el gobierno podía establecer aranceles aduaneros y conceder subsidios. También se eliminó el sistema de cupos de importación y se devaluó la moneda, que pasó de 4,11 pesos por dólar a 11 pesos.

La reforma de Azzini fue atacada durante años, tanto desde la oposición batllista como desde la izquierda. Buena parte de la opinión pública la vio como una amenaza a ese estado benefactor del que todavía esperaba beneficios. La gran masa de empleados públicos la vivió como un ataque a sus intereses. Los empresarios habituados a obtener prebendas del estado la percibieron como un atentado contra sus ingresos futuros. En parte debido a la ley y en parte debido a las condiciones del país, la conflictividad social se disparó y no se redujo en los años siguientes. Los conflictos se sucedieron en el transporte, los bancos, el puerto, ANCAP, UTE, el Frigorífico Nacional, los entes autónomos y la Administración Central. En abril de 1960 se reunió el congreso constituyente de la Central de Trabajadores, que condujo a la creación de la CNT (Convención Nacional de Trabajadores) en 1966.

La reforma de Azzini había sido en lo esencial un acto de sinceramiento que el país no podía postergar: los tipos de cambio múltiples y los cupos de importación se eliminaron porque fomentaban la corrupción, distorsionaban los precios y paralizaban la producción. La devaluación de la moneda fue necesaria porque el estado no tenía más reservas para sostener artificialmente al peso. La economía se abrió relativamente porque había que terminar con la obsolescencia del parque industrial y generar empresarios preparados para la competencia. Los efectos inmediatos de las nuevas reglas fueron positivos: la inflación pasó del 49 por ciento en 1959, al 36 por ciento en 1960 y al 10 por ciento en 1961. El nivel de actividad creció y, por primera vez en mucho tiempo, la balanza de pagos fue positiva. El gobierno en general y el ministro Azzini en particular pagaron grandes costos por haber tomado decisiones que muchos habían evitado. Pero el país nunca volvió a instalar los agobiantes procedimientos que fueron desmantelados en ese momento.

Con el superávit fiscal de 1959 se transformaron todas las escuelas de barro del país y se construyeron centros hospitalarios y docentes. En los años siguientes se financiaron numerosas obras de infraestructura (principalmente carreteras y puentes). En 1960 se creó un órgano llamado CIDE (Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico) en el que trabajaron cerca de trescientas personas bajo la dirección del joven contador Enrique Iglesias. Su tarea esencial fue realizar un inventario y diagnóstico de la situación del país y un Plan Decenal de Desarrollo Económico y Social. En 1963 se realizó el primer censo general

de población y vivienda desde 1908, que dio como resultado una población total de 2.595.510 personas. También se inició la elaboración de cálculos sobre el producto bruto y el ingreso nacional, se elaboró una nueva base de cálculo para los índices de precios y se reorganizaron las estadísticas del estado.

Más allá de los logros y realizaciones, los años del primer gobierno blanco también fueron un período de tensiones sociales y políticas. Las huelgas se sucedieron prácticamente sin interrupción. Las visitas de Fidel Castro en 1959 y del presidente estadounidense Eisenhower en 1960 dieron lugar a incidentes que terminaron con represión policial. En agosto de 1961, Punta del Este fue escenario de la reunión que lanzó la "Alianza para el Progreso", una ambiciosa iniciativa del presidente John Kennedy para América Latina. El representante cubano en el encuentro fue Ernesto Guevara.

El año 1962 fue un año electoral y tuvo los efectos desestabilizadores habituales en el país: la búsqueda de apoyos políticos generó un fuerte incremento del gasto público y terminó con el equilibrio entre ingresos y egresos que se había logrado al principio de la administración. El saldo de la balanza de pagos se hizo negativo y las reservas del BROU volvieron a caer.

La reforma monetaria y cambiaria vista por su creador

Por Juan Eduardo Azzini



La razón de ser de la reforma radicó en los complejos y distorsionantes mecanismos acumulados durante casi treinta años de creciente dirigismo del comercio exterior. Antes de la aprobación de la Ley 12.670, había tantos tipos de cambio, operaciones y regulaciones, que el cuadro económico del país era artificial, injusto, peligroso y complejo. El sistema –si es que cabe el término– implicaba un dirigismo profundo, una oligarquía cambiaria, un creciente desabastecimiento de insumos, bienes de capital y mercaderías varias, el encarecimiento de las importaciones y el déficit del banco oficial.

La idea básica de la reforma se originó en el Instituto de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas en el año 1958. El Dr. Echegoyen expuso sus lineamientos generales el 1º de marzo de 1959, cuando asumió la presidencia del Consejo Nacional de Gobierno. El proyecto terminó de tomar forma a mediados de 1959, antes de que llegara la misión de consultas del Fondo Monetario Internacional.

Una objeción hecha en aquel entonces fue, precisamente, la "sujeción al FMI." Quienes lo decían olvidaban que nuestro país se asoció a los convenios de Bretton Woods desde su nacimiento en 1944, que fue invitado a la firma del convenio, que nuestro Parlamento aprobó el aporte de capital, la designación de gobernadores, el pago en oro, y que realizó consultas con el FMI en 1953, 1954, 1956 y 1957. La primera carta de intención con los organismos de Bretton Woods se firmó en 1951, y la segunda en 1955.

La ley era parte de un plan de gobierno que incluía el ajuste de la administración tributaria, la reforma de la política fiscal, la reestructuración del presupuesto, la consolidación de déficits anteriores, el pago de cuentas públicas con 40 años de atraso y la unificación de la deuda pública. La reforma significó la supresión de los tratamientos cambiarios por decreto, la liberación y desregulación del comercio exterior, el abastecimiento de la plaza y el sinceramiento cambiario, estableciendo defensas transitorias –recargos, depósitos, detracciones– que debían incorporarse al sistema arancelario en el correr de unos tres años. El producido de los recargos y detracciones iba a un fondo especial que se destinaba a obras públicas, subsidios agrícolas, abaratamiento de insumos, etc., de acuerdo a un presupuesto que debía ser presentado anualmente al Parlamento. El 75 por ciento de esos recursos se destinaba a sectores fuera de Montevideo.

La reforma cambiaria consiguió así crear un clima de confianza en los agentes económicos y marcó reglas de juego legislativas y conocidas. Las medidas que la complementaron permitieron un dinamismo económico que se apreció en el ingreso de capitales y el alto coeficiente de inversión. Mejoraron en forma inmediata las cuentas presupuestales, el comportamiento fiscal, el producto, las cuentas externas y bajó considerablemente el índice de precios al consumo.

Ese es el saldo del trabajo duro y difícil de un equipo interdisciplinario, que no tuvo otro distintivo que los superiores intereses de nuestro país. ■

EL SEGUNDO GOBIERNO BLANCO

Las elecciones del 25 de noviembre de 1962 trajeron novedades en las propuestas de los partidos menores. El Partido Socialista (que había pasado a ser conducido por Vivián Trías, en detrimento del dirigente histórico Emilio Frugoni) hizo una alianza con un grupo de nacionalistas escindidos para conformar la Unión Popular. El Partido Comunista consiguió aplicar en Uruguay la estrategia de frentes políticos que los comunistas venían aplicando en muchas partes del mundo. Así nació el Frente Izquierda de Liberación (FIdeL), cuyo núcleo era el Partido Comunista pero incluía algunos desgajamientos de los partidos tradicionales. Los más notorios eran Avanzar y el Movimiento Batllista 26 de Octubre (provenientes del Partido Colorado) y el Movimiento Revolucionario Oriental (proveniente del Partido Nacional). En esas elecciones también se presentó por primera vez el Partido Demócrata Cristiano, que surgía como reformulación de la vieja Unión Cívica y tenía como modelos a los exitosos partidos demócristianos de Venezuela y Chile.

En el Partido Nacional, la UBD se alió con el Herrerismo ortodoxo (integrado entre otros por Víctor Haedo, Alberto Heber y Luis Giannattasio) para conformar lo que pasó a llamarse la "Ubedoxia". El principal objetivo del movimiento era neutralizar la influencia de Benito Nardone. El resto del Herrerismo, con Martín Echegoyen a la cabeza, mantuvo su alianza con el ruralismo.

historiareciente

18/25

Una serie de 25 fascículos publicada por el diario El País con el apoyo del **Centro de Estudios Jean-François Revel**.

Dirección de proyecto
Pablo da Silveira

Investigación y redacción
Pablo da Silveira
Francisco Faig
Félix Luna
Enrique Mena Segarra
Martín Peixoto

Asistente
José López

Fotografías
Archivo de El País

Diseño gráfico, armado y corrección
Trocadero

Publicación
El País

Impreso en El País
Depósito legal: 334.251



En el Partido Colorado se mantuvieron las divisiones surgidas tras la derrota de 1958. El liderazgo de Luis Batlle fue cuestionado dentro de la propia Lista 15. Algunas promisorias figuras de esa corriente (Zelmar Michelini, Hugo Batalla y Aquiles Lanza) decidieron aliarse con algunos dirigentes que habían abandonado la Lista 14 (Renán Rodríguez y Enrique Martínez Moreno) para conformar la Lista 99. El nuevo movimiento postulaba un programa renovador al que presentaba como una actualización de los principios batllistas. La Lista 14, por su parte, se transformó en la Unión Colorada y Batllista y presentó como candidato al general retirado Oscar Gestido.

Los blancos volvieron a vencer a los colorados, aunque la diferencia se redujo de 120 mil a unos 23 mil votos. Aun así, el Partido Nacional retuvo 13 de los 18 departamentos que había ganado en las elecciones anteriores. Pero el cambio más notorio fue que, por primera vez en su historia, el Herrerismo dejó de ser la mayoría partidaria. Ese lugar correspondía ahora a la recién creada "Ubedoxia".

Dentro del Partido Colorado, la Lista 15 consiguió imponerse sobre la Unión Colorada y Batllista. Pero la mayor sorpresa fue la buena votación de la Lista 99, que obtuvo más de 76 mil sufragios. En parte era un síntoma de renovación del Partido Colorado y en parte era una prueba de debilitamiento del liderazgo de Luis Batlle. Ese debilitamiento no se debía solo a razones políticas: el ex presidente había sufrido dos infartos, el 24 de abril de 1959 y el 19 de mayo de 1960.

Las expresiones políticas de izquierda volvieron a ser minoritarias: la Unión Popular y el FIdeL cosecharon en conjunto el 5,8 por ciento de los votos. La Democracia Cristiana tuvo menos votos que los que había obtenido la Unión Cívica en las elecciones anteriores.

El Consejo Nacional de Gobierno quedó integrado por Daniel Fernández Crespo, Luis Giannattasio, Washington Beltrán, Alberto Heber, Carlos María Penadés y Washington Guadalupe por los blancos. La minoría colorada estaba constituida por Luis Batlle Berres y Amílcar Vasconcellos por la Lista 15, y Oscar Gestido por la 14. Washington Guadalupe renunció de inmediato y fue suplantado por Héctor Lorenzo y Losada. También renunció Luis Batlle, que prefirió integrarse al Senado. Su lugar fue ocupado por Alberto Abdala.

El segundo gobierno blanco no enfrentó tantas dificultades iniciales como el primero (las cuentas nacionales estaban ordenadas, no había inundaciones) pero rápidamente se vio aquejado por sus problemas internos. La unidad de la "Ubedoxia" se rompió casi enseguida. El sector mayoritario, liderado por el consejero Alberto Heber, estaba en puja con el grupo del senador Haedo. Este último controlaba *El Debate*, que desplegaba una prédica agresiva contra algunos ministros de la UBD. El ministro de Hacienda Salvador Ferrer Serra atacaba públicamente la reforma de Azzini y se refería a ella como

La Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico

Por Adolfo Garcé

La CIDE fue creada el 27 de enero de 1960 por un decreto del ministro Juan Eduardo Azzini. Mediante esta comisión, Azzini procuraba facilitar la coordinación de los planes de inversión pública entre los principales ministerios. Al constituirse la Alianza para el Progreso en agosto de 1961, el gobierno decidió dotarla de una Secretaría Técnica. La razón era sencilla: los países que quisieran acceder al financiamiento ofrecido por el gobierno norteamericano, deberían formular "planes de desarrollo amplios y bien concebidos".

Al frente de la Secretaría Técnica fue designado el contador Enrique Iglesias, que venía teniendo una actuación importante en el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Para generar la información que permitiera estructurar los planes, Iglesias organizó numerosos grupos de trabajo con expertos nacionales (en su mayoría muy jóvenes) y especialistas extranjeros financiados por la cooperación internacional (OEA, BID y CEPAL).

En los grupos de trabajo de la CIDE participaron especialistas que, con el paso del tiempo, habrían de jugar un papel muy destacado en diversos ámbitos de la vida nacional: Danilo Astori, Celia Barbato, Alberto Bensión, Mario Bucheli, Agustín Canessa, Alberto Couriel, Ariel Davrieux, Samuel Lichtensztejn, Germán Rama, Aldo Solari, Juan Pablo Terra, Alejandro Végh Villegas y Ricardo Zerbino, entre muchos otros. En 1965 los grupos terminaron el trabajo y se dispersaron.

Durante el segundo colegiado nacionalista (1963-1966) la labor de planificación fue apoyada con especial entusiasmo por Washington Beltrán, desde el Consejo de Gobierno, y por dos ministros muy influyentes: Wilson Ferreira Aldunate (Ganadería) y Juan Pivel Devoto (Instrucción Pública). Casi finalizando su segundo mandato, el gobierno recibió un Plan Anual, un Plan Trienal y un voluminoso Plan de Desarrollo Económico y Social con proyecciones para el período 1965-1974.

La propuesta estaba en sintonía con los ejes del pensamiento cepalino de la época: Uruguay debía realizar un conjunto de "cambios estructurales" entre los que se destacaba la reforma agraria, el desmontaje del "proteccionismo indiscriminado" y su sustitución por la "promoción industrial selectiva", la integración regional y el fortalecimiento de la capacidad técnica del estado. El Consejo de Gobierno, en sesión del 10 de febrero de 1966, aprobó por unanimidad esos lineamientos.

El trabajo de la CIDE generó el primer diagnóstico global de la situación económica y social del país. Entre 1962 y 1963, la cantidad y la calidad de la información económica y social disponible experimentaron un aumento notorio, especialmente a partir de la ejecución de dos tareas que el país venía postergando desde hacía muchos años: el Censo de Población y Vivienda y las Cuentas Nacionales. Sobre esta base se redactó el *Estudio económico del Uruguay,* publicado en 1963.

La CIDE también dejó un profundo legado en el plano de las instituciones y las políticas públicas. Muchas de sus propuestas (como la transformación de la propia CIDE en Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la creación del Banco Central y la incorporación de la técnica del Presupuesto por Programa) se plasmaron en la reforma constitucional de 1966. Otras se incorporaron durante los gobiernos de Gestido y Pacheco (entre ellas, la Ley Forestal y la Ley de Vivienda, sancionadas en 1968). Otras se aplicaron durante los primeros años de la dictadura, como la creación de ANTEL, la Ley de Inversiones y la Ley de Promoción Industrial.

Por último, la CIDE dejó una huella profunda en la ideología de los principales actores políticos. En el Partido Nacional, el desarrollismo anidó en torno al creciente liderazgo de Wilson Ferreira. En el Partido Colorado, los efectos fueron múltiples. Por un lado, se gestó una nueva versión, aggiornada y cepalina, del dirigismo batllista, cuya expresión fue la Lista 99 de Zelmar Michelini y Luis Faroppa. Por el otro, en torno a la UCB y la Lista 15 se fue configurando un *mix* entre desarrollismo, liberalismo y batllismo que dio lugar al Plan Nacional de Desarrollo preparado en la OPP durante 1972, bajo la dirección de Ricardo Zerbino y Alberto Bensión. La izquierda, que había observado el trabajo de la CIDE con más recelo que simpatía, también terminó incorporando algunas de sus propuestas a las "Bases Programáticas de la Unidad", uno de los documentos fundacionales del Frente Amplio.

Hay paradojas en esta historia. La CIDE dejó una estela profunda de ideas y reformas, pero fue interpretada como un fracaso por la mayoría de sus protagonistas y testigos. Tendió un puente entre intelectuales y política justo cuando se abría el peor abismo entre ellos. Constituyó un gran esfuerzo de cooperación y convergencia, justo en la antesala de la crispación, el conflicto, la polarización y la violencia. ■

"la herencia maldita". Estas discordias afectaban la imagen del gobierno y le quitaban eficacia a sus acciones.

La situación económica seguía complicándose, entre otras cosas porque el contexto internacional cambiaba muy rápido. La Comunidad Europea había aprobado su Política Agrícola Común en 1960, lo que había llevado a un aumento de los aranceles y de los subsidios a sus productores. La Unión Soviética había puesto en marcha un ambicioso plan para aumentar su producción de carne y leche. Países como Autralia y Nueva Zelanda estaban aumentando su productividad. Los precios internacionales caían y Uruguay empezaba a parecerse a una familia cuya actividad de siempre ya no le permite mantener su antiguo nivel de vida. En mayo de 1963, el Banco República se vio obligado a devaluar la moneda en un 50 por ciento. El dólar, que costaba 11 pesos, pasó a valer 16,50.

Los dirigentes políticos buscaban soluciones, pero lo hacían en direcciones divergentes. Ferrer Serra, el ministro de Hacienda, quería abandonar la línea de liberalización económica iniciada en 1959 y consiguió reimplantar parcialmente el sistema de cupos de importación. En cambio, el ministro de Ganadería y Agricultura, Wilson Ferreira Aldunate, presentó en setiembre de 1963 un proyecto de reforma agraria. Su propuesta no fue respaldada por el gobierno, pero Wilson Ferreira siguió impulsando políticas innovadoras que se basaban en dos pilares: el modelo neozelandés de explotación agropecuaria y las teorías económicas desarrollistas promovidas en ese entonces por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Entre marzo y julio de 1964 fallecieron Benito Nardone, Javier Barrios Amorín, Luis Batlle Berres y Daniel Fernández Crespo. César Batlle renunció a su banca en el Senado y se alejó de la política activa (moriría en 1966). En momentos de desconcierto para el país, los partidos tradicionales perdían a sus principales líderes.

Uruguay enfrentaba una crisis que no terminaba de entender y para la que no encontraba salida. La inestabilidad económica y la incertidumbre generaron especulación financiera, huida de capitales y carestía causada por las retenciones de *stock*. La inflación iba en aumento y los salarios reales caían. Las movilizaciones sindicales se intensificaron. En febrero de 1963 se declararon en huelga los trabajadores de UTE y el gobierno decidió implantar medidas prontas de seguridad. En los quince meses que transcurrieron desde enero de 1964 a marzo de 1965 se contabilizaron más de 650 movilizaciones en todo el país, incluyendo paros, huelgas y ocupaciones.

A esta difícil situación vino a sumarse, en abril de 1965, una crisis bancaria que llevó a la intervención del Banco Transatlántico. Para evitar la corrida, los bancos se mantuvieron cerrados durante tres semanas y se recurrió a las medidas prontas de seguridad. El nuevo ministro de Hacienda, Dardo Ortiz, dispuso la limitación de las importaciones suntuarias y competitivas de la producción nacional. También devaluó fuertemente el peso para favorecer las exportaciones: el dólar pasó de costar 24 pesos a costar 59,9. Pero el plan no dio resultado y los uruguayos se enfrentaron a un escenario que luego se haría familiar: la inflación siguió creciendo y el peso se siguió devaluando. En octubre de 1965, ante la presión de los gremios que reclamaban ajustes salariales, el gobierno volvió a implantar medidas prontas de seguridad.

Cuando se aproximaron las elecciones de 1966, las críticas al sistema de gobierno colegiado se habían vuelto recurrentes y generalizadas. El sistema era acusado de causar parálisis y de impedir una gestión eficiente. Enfrentados a dificultades económicas acuciantes, los uruguayos buscaron soluciones en una reforma constitucional que diera mayor capacidad de acción al Poder Ejecutivo. Cuando acudieron a las urnas en noviembre de ese año, decidieron simultáneamente desalojar a los blancos del gobierno y terminar con el régimen colegiado. ■

BIBLIOGRAFÍA

Arocena Olivera, Enrique: *Proceso Histórico de la Economía Uruguaya. Del mercantilismo colonial al enciero dirigista.* Montevideo, Linardi y Risso, 2002.

Arregui Miguel, Maiztegui Lincoln, et ál.: *Gran Enciclopedia del Uruguay.* El Observador, Montevideo, 2000- 2002.

Bértola, Luis: *Ensayos de Historia Económica: Uruguay y la Región en la Economía Mundial 1870-1990.* Montevideo, Trilce, 2000.

Caetano, Gerardo y Rilla, José: *Historia contemporánea del Uruguay. De la colonia al siglo XXI.* Montevideo, editorial Fin de Siglo, 2005.

Chagas, Jorge y Trullen, Gustavo: *Pacheco. La Trama Oculta del Poder.* Montevideo, Rumbo Editorial, 2005.

De Arteaga, Juan José: *Breve historia contemporánea del Uruguay.* México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

D´Elía, Germán: *El Uruguay neo-batllista, 1946-1958.* Montevideo, Banda Oriental, 1982.

Demasi, Carlos y Alonso, Rosa: *Uruguay 1958-1968: crisis y estancamiento.* Montevideo, Banda Oriental, 1986.

Díaz, Ramón. *Historia económica de Uruguay.* Montevideo, Santillana, 2003.

Di Segni, Rossanna y Mariano, Alba: *Los blancos al poder.* Enciclopedia Uruguaya, Montevideo, 1969.

Faroppa, Luis: *Industrialización y dependencia. Enciclopedia Uruguaya.* Montevideo, 1969.

Finch, Henry: *Historia económica del Uruguay contemporáneo.* Montevideo, Banda Oriental, 1980.

Finch, Henry: *"Uruguay, 1930-1990".* En Leslie Bethell (ed): Historia de América Latina. Barcelona, Crítica, 2002.

Frega, Ana, Maronna, Mónica y Trochón, Yvette: *Baldomir y la restauración democrática (1938-1946).* Montevideo, Banda Oriental, 1987.

Haedo, Eduardo Víctor: *Herrera. Caudillo Oriental.* Montevideo, Arca, 1969.

Instituto de Economía. *El Uruguay del siglo XX. La economía.* Montevideo, Banda Oriental, 2005.

Jacob, Raúl: *Benito Nardone, el ruralismo hacia el poder, 1945-1958.* Montevideo, Banda Oriental, 1981.

Lessa, Alfonso: *Estado de Guerra. De la gestación del golpe del 73 a la caída de Bordaberry.* Montevideo, Fin de Siglo, 2005.

Machado Ferrer, Martha y Fagúndez Ramos, Carlos: *Los años duros.* Montevideo, Editorial Monte Sexto, 1987.

Manini Ríos, Carlos: *Anoche me llamó Batlle.* Montevideo, Letras, 1970.

Mercader, Antonio: *El año del León. 1940: Herrera, las bases norteamericanas y el complot nazi.* Montevideo, Aguilar, 1999.

Nahum, Benjamín et ál.: *Historia Uruguaya Tomo 7. Crisis política y recuperación económica.* Montevideo, Banda Oriental, 1991.

Nahum, Benjamín. *Manual de Historia del Uruguay. Tomo 2. 1903-2000.* Montevideo, Banda Oriental, 2005.

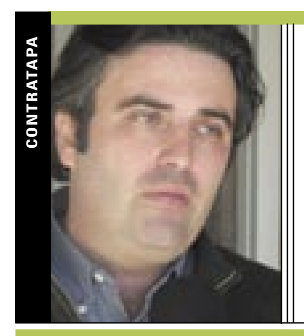
Oddone, Juan: *Uruguay entre la depresión y la guerra, 1929-1945.* Montevideo, FCU, 1990.

Oddone, Juan: *Vecinos en discordia. Argentina, Uruguay y la política hemisférica de los EEUU. Selección de documentos 1945-1955.* Montevideo, El Galeón, 2004.

Podetti, Ramiro: *La azotea de Haedo.* Montevideo, Ediciones de la Plaza, 2001.

Real de Azúa, Carlos: *La historia política.* Montevideo, Enciclopedia Uruguaya, 1969.

Reyes Abadie, Washington y Melogno, Tabaré: *Crónica General del Uruguay. Tomo VII. El siglo XX. Volumen 2.* Montevideo, Banda Oriental, 2001. ■



Lecciones de un Uruguay ensimismado

Por Francisco Faig Garicoïts

El Uruguay de Maracaná es una poderosa imagen de un pasado exitoso. Era un país excepcional en un mundo que salía de la peor guerra que vivió la humanidad. Sin embargo, ese Uruguay satisfecho de sus logros no supo cómo mantener un camino de prosperidad económica. Cayó sin remedio en una decadencia de largo aliento.

En vez de liberar las fuerzas individuales y sociales para conquistar mercados, ganar en productividad e insertarse en la economía mundial sobre la base de un crecimiento industrial competitivo, creyó con terquedad en la capacidad de desarrollo que ofrecía un menguado mercado interno. En vez de levantar la mira y seguir la ruta de exigencia económica que emprendían Nueva Zelanda o Canadá, o adaptar los modelos de desarrollo que aseguraron el crecimiento europeo durante los "treinta gloriosos" años de posguerra, se satisfizo con ser la excepción en América Latina y mirar a sus vecinos con condescendencia. Negó las virtudes de la competencia y forjó un capitalismo prebendario, rentista, dependiente e ineficaz, que muy pronto dio quiebra. Cuando en 1958 decidió cambiar de rumbo, sus fuerzas ya flaqueaban.

Su intelectualidad se obnubiló ante un espejo que le devolvía una reconfortante y provincial sensación de satisfacción. Su espíritu crítico quedó absorto ante una (nefasta) revolución cubana. Se preocupó por reprender y deshacer al Uruguay liberal, sin atender las dimensiones que dieron impulso a ese magnífico país de los años veinte. Atendió lo que pasaba a su alrededor pero con una curiosidad contemplativa, solo capaz de incidir en el diálogo confirmatorio de la excepcionalidad, cómodamente instalado en el café Sorocabana.

Su sistema político diluyó la responsabilidad de la conducción del país en un laberinto de acuerdos y de coparticipaciones pluripartidarias que garantizaron precarios equilibrios paralizantes. La preocupación por integrar a amplios sectores de la sociedad se degradó en la multiplicación de cargos públicos (con su lastre de rutina y frustración) y de pensiones y jubilaciones tempranas. Los uruguayos se fueron convenciendo de que era el Estado, y no su propio esfuerzo, el que debía satisfacer sus necesidades. Ese Estado distribuía bienestar al mismo tiempo que minaba las bases de un desarrollo económicamente sano, hipotecando el futuro de nuevas generaciones que pronto recorrieron los caminos de la violencia política, de la emigración y de la frustración social.

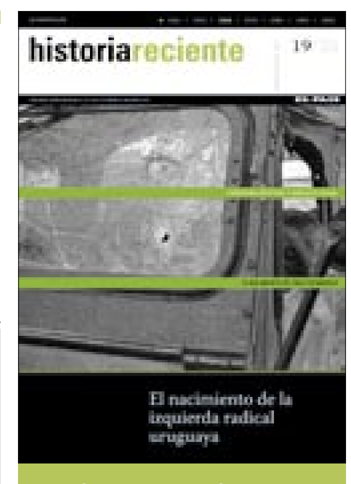
Fue un país que se encerró. No logró embarcarse en cambios estructurales que acompañaran los nuevos tiempos capitalistas del mundo occidental. Las respuestas preferidas estaban teñidas del éxito pasado, tentadas por la nostalgia idealizada, incapaces de asumir las nuevas coyunturas. Como si las respuestas para encaminarse en la prosperidad en los años sesenta se encontraran, incólumes, en los programas de acción dirigistas de finales de los años treinta y principios de los cuarenta. Cuando generó los diagnósticos de la CIDE, la batalla estaba perdida. La urgencia de la inflación, el peso de la violencia política y la inacción de los partidos maniatados por la atomización impidieron una respuesta coherente de largo plazo. El Uruguay narcisista se hizo autista de tanto mirarse en el espejo de su condescendiente pasado. Pero nunca logró salir airoso de su crisis.

La tentación nostálgica, lamentablemente, sigue presente. Un país tentado por una industrialización sin competencia, obsesionado en la defensa de sus pequeños privilegios angustiosamente conservados, que sigue sin querer enfrentarse a los cambios internacionales. Prefiere la decadente autoconfirmación tranquilizadora antes que la apertura enriquecedora.

Las nuevas generaciones son las protagonistas. Son ellas las que pueden forjar un país abierto al mundo, integrado a una economía que privilegie la capacidad individual y la inserción sobre nuevas bases. El pasado nos enseña que no es posible transitar el camino de la prosperidad desde el ensimismamiento, desde la mirada hacia adentro, desde la confirmación de las pequeñas certezas provinciales, desde una suerte de Albania latinoamericana. Es por el contrario en la apertura serena, en la aceptación de la competencia y de la diferencia que podremos crecer. No le tengamos miedo al mundo. Enfrentemos su realidad, insertémonos en ella. Decididos a afirmar nuestra identidad, pero no la de una lejana "tacita del Plata" de los años cincuenta, sino una que nos asegure desarrollarnos como individuos felices de vivir en Uruguay.

El país está a tiempo de exigir cambios. Ello implica, antes que nada, darnos cuenta de que la nostalgia nacional no es una guía capaz de asegurar un futuro de prosperidad. Por el contrario, entumece nuestros músculos, abruma nuestra vitalidad, agobia nuestra imaginación. Nos vuelve al Uruguay ensimismado, al país de la decadencia. ■

Francisco Faig Garicoïts. Uruguayo, nacido en 1974, obtuvo el *Diplôme D´Etudes Approfondies* (DEA), con especialización en política comparada, en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París. Es edil departamental de Río Negro. Escribe en medios de prensa uruguayos y es profesor en la Licenciatura de Estudios Internacionales de la Universidad ORT. En 1996 publicó *Sistema electoral y gobernabilidad en Uruguay*.



PRÓXIMO FASCÍCULO

19/25

El nacimiento de la izquierda radical uruguaya